RECOMENDACIÓN No. 1/ 2015

SÍNTESIS.-Servidora pública jubilada se quejó de que el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero se niega ejecutar el laudo a su favor para que le paguen su pensión, retenida desde hace 8 años.

Del proceso de investigación, las evidencias arrojaron que existen datos o elementos para presumir probable violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica en la modalidad de in ejecución de laudo.

Motivo por el cual se recomendó: PRIMERA.- A Usted, C. LIC. EFRAÍN HERNÁNDEZ CABALLERO, en su calidad de Presidente del Ayuntamiento de Guerrero, someta a consideración de ese órgano colegiado del municipio, a efecto de que se instruya procedimiento administrativo al Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guerrero, en el que se analicen las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente, y en su caso, se impongan las sanciones que en derecho correspondan.

SEGUNDA.- A Usted, C. LIC. HÉCTOR MANUEL GRANADOS ARANA, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guerrero, se realicen a la brevedad, las actuaciones necesarias para que se ejecute conforme a derecho proceda, el laudo dictado dentro del procedimiento identificado.

RECOMENDACION No. 01/15

Visitadora Ponente: LIC. YULIANA SARAHÍ ACOSTA ORTEGA
Chihuahua, Chih., 1° de abril de 2015.

LIC. EFRAÍN HERNÁNDEZ CABALLERO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE GUERRERO
P R E S E N T E . –

LIC. HÉCTOR MANUEL GRANADOS ARANA
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO DE GUERRERO
P R E S E N T E . –

- - - Vistos los autos para resolver en definitiva el expediente número LS-314/14, formado con motivo de la queja presentada por “A”¹, de conformidad con lo previsto por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 42 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, se procede a resolver según el examen de los siguientes:

I.- ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 18 de junio de 2014, se recibe escrito de queja signado por “A”, en el siguiente sentido:

“...1. La suscrita “A”, laboré subordinadamente para el Municipio de Guerrero, Chih., o el H. Ayuntamiento de Guerrero, Chih., desde el 15 de diciembre de 1981.

2. *Como la suscrita laboré por más de veinticinco años ininterrumpidos, por lo que de conformidad al contrato colectivo de trabajo, celebrado entre el Municipio*

¹ Por razones de confidencialidad y protección de datos personales en la presente recomendación, este Organismo determinó guardar la reserva del nombre de la impetrante y demás datos que puedan conducir a su identidad, enlistando en documento anexo la información protegida.

de Guerrero, Chih. y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Guerrero, Chih., en fecha 10 de septiembre de 2007, el C. Presidente Municipal de Guerrero y otras autoridades municipales, previa investigación, tuvieron a bien emitir a mi favor dictamen jubilatorio.

3. Pagándome la pensión jubilatoria correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de octubre de 2007, es decir los pagos correspondientes a fechas 15 y 30 de octubre de 2007.

4. Sin embargo, a partir del 10 de noviembre de 2007 y hasta la fecha, dejó de entregarme mis pensión jubilatoria, sin expresar motivo alguno, a pesar de los muchos requerimientos que de manera personal he hecho.

5. Por lo que en fecha 11 de febrero de 2008, ocurrió ante el H. Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, Chihuahua, a demandar en la vía ordinaria laboral a: El H. Ayuntamiento de Guerrero, Chihuahua y/o Municipio de Guerrero, Chihuahua y/o el Sindicato Único de Trabajadores Municipales, de Guerrero, Chih.

6. Más de tres meses después de presentada la demanda, el H. Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, Chihuahua, en fecha 15 de mayo de 2008, resolvió radicar la demanda, lo que hizo bajo el número de expediente "B".

7. Casi dos meses después, en fecha 03 de julio de 2008, se emplazó a juicio a todos los demandados en los términos del auto de radicación de fecha quince de mayo de dos mil ocho.

8. Seguido que fue el procedimiento, el cual dicho sea de paso, por demás lento, se declaró cerrada la instrucción y se remitieron los autos al Presidente del H. Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, Chihuahua, a fin de que emitiera el proyecto de resolución correspondiente y en su oportunidad dictara el laudo correspondiente.

9. Es el caso que en fecha 27 de septiembre de 2013, se dictó el laudo que resolvió el fondo del juicio laboral, concediendo a la demandada un término de 72 horas para que dé cumplimiento voluntario a la condena que se les hizo.

10. Sin embargo, es hasta la fecha y a pesar de que han transcurrido más de 8 meses, que el H. Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, Chihuahua, no han notificado a las demandadas, el laudo donde se les condena, por lo que el término de 72 horas que se les concedió, no ha iniciado.

11. *De lo que evidentemente, se desprende que los servidores públicos que constituyen el H. Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, Chihuahua, han vulnerado mis derechos fundamentales, sobre todo el previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos...* (Sic)

Se anexó a la queja, la documental consistente en copia simple del laudo de fecha 27 de septiembre de 2013, dictado por el H. Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero.

2.- El día 25 de junio de 2014 se solicitó el informe de ley, mediante oficio número LS-233/14, dirigido al Lic. Héctor Manuel Granados Arana, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, posteriormente, ante la falta de respuesta se emitieron dos recordatorios al mismo funcionario, en fechas 17 de julio y 20 de agosto del año 2014, sin haber recibido respuesta a tales peticiones.

II.-EVIDENCIAS:

3.- Escrito de queja firmado por "A", recibido en este organismo el día 18 de junio del 2014, cuyo contenido ha quedado transcrito en el antecedente marcado con el número 1. (Evidencia visible en fojas 1 - 6)

4.- Documental aportada por la quejosa, consistente en copia simple del laudo emitido por el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guerrero Chihuahua, en fecha 27 de septiembre de 2013, dentro del expediente "B" de su índice, en cuyo resolutive segundo establece: *"...Se condena a la demandada Municipio de Guerrero, Chihuahua, a otorgar en favor de la actora "A" una pensión vitalicia de retiro de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo aplicable a ésta, por el municipio de Guerrero y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Guerrero, particularmente conforme a la cláusula 64 y demás relativas y aplicables del contrato colectivo de trabajo, con los incrementos correspondientes, a partir de la fecha del último pago que le fue realizado a la trabajadora por parte de la demanda es decir a partir del día 01 de noviembre de 2007..."* (Sic) (Evidencia visible a fojas 7 - 28).

5.- Solicitud de informe mediante oficio LS-233/14 de fecha 25 de junio de 2014, dirigido al Lic. Héctor Manuel Granados Arana, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, en el cual se le inquiriere expresamente el motivo por el cual no se ha dado cumplimiento al laudo de referencia; así como la respectiva constancia de envío. (Evidencia visible en fojas 30 a la 32).

6.- Recordatorio a la solicitud de informe dirigida al mismo funcionario, mediante oficio YA-252/2014 fechado el 17 de julio de 2014, con la respectiva constancia de envío, vía servicio de mensajería.

7.- Constanza elaborada por la visitadora ponente, referente a la llamada telefónica realizada el 17 de julio de 2014 al Lic. Héctor Manuel Granados Arana, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, para efecto de confirmar la recepción del oficio descrito en el párrafo anterior, a lo cual dijo haber recibido tal solicitud y que únicamente le faltaba recabar una firma para enviar el informe requerido. (Foja 35)

8.- Oficio No. YA-282/14 de fecha 20 de agosto del 2014 por medio del cual se hace un último recordatorio de solicitud de informe a la misma autoridad requerida con anterioridad. (Foja 42).

III.- CONSIDERACIONES:

9.- Esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos es competente para conocer y resolver del presente asunto, atento a lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1º, 3º, 6º fracción II inciso A y 42 de la Ley de este organismo derecho humanista, así como los numerales 78, 79 y 80 del Reglamento Interno de la propia institución.

10.- Según lo establecido en el artículo 42 del ordenamiento legal antes invocado, resulta procedente por así permitirlo el estado que guarda la tramitación del presente asunto, analizar los hechos, argumentos y pruebas, así como los elementos de convicción, a fin de determinar si las autoridades o los servidores han violado o no los derechos humanos de la quejosa, al haber incurrido en actos ilegales o injustos, por lo que las pruebas recabadas durante la investigación, deberán ser valoradas en su conjunto de acuerdo a los principios de la lógica y la experiencia, con estricto apego al principio de legalidad que demanda nuestra Carta Magna, para que una vez realizado ello, se pueda producir convicción sobre los hechos materia de la presente queja.

11.- Una de las facultades conferidas a este organismo, es el procurar una conciliación entre quejosos y autoridades, con tal motivo, en las tres solicitudes de informe que se enviaron a la autoridad se manifestó expresamente dicha posibilidad, sin embargo ésta no emitió respuesta alguna, con lo que se entiende agotada la posibilidad de una conciliación entre impetrante y autoridad.

12.- Corresponde ahora determinar si los hechos plasmados en el escrito de queja recibido en esta Comisión el día 18 de junio de 2014, quedaron acreditados, para

que en caso afirmativo, determinar si los mismos resultan ser violatorios a derechos humanos.

13.- Del análisis de la queja formulada por “A”, que aquí damos por reproducida en aras de evitar repeticiones innecesarias, se desprende con meridiana claridad que el motivo esencial de su inconformidad lo constituye la inejecución del laudo dictado a su favor por el Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, en fecha 27 de septiembre de 2013.

14.- Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley que rige este organismo, tan pronto se reciba una queja y se admita la instancia, se debe poner en conocimiento de las autoridades señaladas como responsables y solicitar que rindan un informe sobre los actos, omisiones o resoluciones que se les atribuyen, tal como sucedió en el presente caso, que se solicitó en tres ocasiones el informe correspondiente al Lic. Héctor Manuel Granados Arana, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, mediante oficios de fecha 25 de junio, 17 de julio y 20 de agosto del año 2014, sin que se recibiera respuesta a lo solicitado. Incluso existe constancia de una comunicación sostenida vía telefónica entre la visitadora ponente y el mencionado funcionario público municipal, para el mismo efecto.

15.- En los mencionados oficios, se hizo del conocimiento de la autoridad requerida, que conforme a lo previsto en el artículo 36 del ordenamiento legal invocado, la falta de rendición del informe o de la documentación que lo apoye, así como el retraso injustificado en su presentación, además de la responsabilidad respectiva, tendría el efecto de que en relación con el trámite de la queja se tengan por ciertos los hechos materia de la misma, salvo prueba en contrario.

16.- Este organismo lamenta la conducta omisa y la falta de colaboración hacia este organismo garante de los derechos humanos, por parte del Lic. Héctor Manuel Granados Arana, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores del Municipio de Guerrero, resaltando que la injustificada falta de rendición de informe, en sí mismo puede ser motivo de responsabilidad administrativa, en los términos del numeral 36 de la Ley de rige nuestra actuación.

17.- Conforme a la disposición legal antes invocada, ante la falta de rendición de informe de la autoridad, en el presente caso opera la presunción de que los actos reclamados por la impetrante son ciertos, en relación con el trámite de la queja en estudio.

18.- La afirmativa ficta no resulta aislada, sino que se ve confirmada con el contenido de la documental aportada como evidencia por la quejosa, reseñada

como evidencia número 4, por lo que tenemos como hechos plenamente acreditados: que el día 27 de septiembre de 2013, el Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guerrero, Chihuahua, dentro del expediente "B" dictó un laudo definitivo, en cuyo resolutive segundo establece literalmente: *Se condena a la demandada Municipio de Guerrero, Chihuahua, a otorgar en favor de la actora "A" una pensión vitalicia de retiro de acuerdo con el contrato colectivo de trabajo aplicable a ésta, por el municipio de Guerrero y el Sindicato Único de Trabajadores Municipales de Guerrero, particularmente conforme a la cláusula 64 y demás relativas y aplicables del contrato colectivo de trabajo, con los incrementos correspondientes, a partir de la fecha del último pago que le fue realizado a la trabajadora por parte de la demanda es decir a partir del día 01 de noviembre de 2007...*"

19.- Así pues, se tiene como hecho probado la existencia de un procedimiento laboral sustanciado ante el multireferido tribunal, al cual recayó un laudo favorable a los intereses de la hoy quejosa, dictado en fecha 27 de septiembre del año 2013, doliéndose "A" de que a esta fecha no ha sido ejecutado dicho laudo en sus términos, con la consecuente afectación a sus derechos.

20.- Al respecto, cabe hacer las mismas consideraciones vertidas en párrafos anteriores, es decir, al no rendir su informe, la autoridad no argumenta haber cumplimentado la resolución de marras, a pesar de tres requerimientos que se le hicieron, y una comunicación vía telefónica para el mismo fin con el titular del Tribunal Municipal de Arbitraje, por ende, resulta procedente tener por cierto el señalamiento de inexecución del laudo.

21.- Al no ejecutarse la resolución del tribunal que decidió sobre el fondo del conflicto materia del procedimiento, sin mediar causa que justifique tal omisión, se contraviene lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al Código Administrativo de nuestro Estado, según el cual los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación; sin que en el caso bajo análisis se aprecie justificación alguna que pudiera haber retardado la notificación del laudo, como requisito para su ejecución. De tal suerte que el procedimiento tramitado de conformidad con el Título IV, Capítulo VII del mencionado Código se encuentra inconcluso, con lo que el Tribunal de Arbitraje Municipal de Guerrero no ha cumplido a cabalidad con sus funciones, según se desprende de los artículos 77 y 78 del Código Municipal para nuestro Estado.

22.- Dentro de ese contexto, resulta incuestionable que con su omisión, el tribunal municipal encargado de impartir justicia en materia laboral, le hace nugatorio a la

quejosa su derecho a recibir la pensión vitalicia que se establece en el laudo emitido por el mismo órgano, que se traduce en una violación al derecho a la seguridad jurídica, en su modalidad de inejecución de laudo.

23.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 17, párrafo segundo, el derecho de toda persona a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, mientras que el párrafo sexto del mismo numeral, dispone que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y **la plena ejecución de sus resoluciones.**

24.- En el plano internacional, el derecho a la seguridad jurídica se encuentra consagrado en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 8.1, 8.2, 9 y 10 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 8, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

25.- Adicionalmente, el “Pacto de San José” en su artículo 25 referente a la protección judicial, prevé en su párrafo 2 inciso c), que los Estados Partes se comprometen a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

26.- Según el artículo 8.1 de la misma Convención Americana, toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden laboral, entre otros.

27.- En cuanto al criterio que deberá seguirse para determinar el “plazo razonable”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido reiteradamente que debe tenerse en cuenta la complejidad del asunto, actividad procesal del interesado y conducta de las autoridades jurisdiccionales, resultando a todas luces que el caso bajo análisis no representa una gran complejidad, ni se aprecia que sea la actividad procesal de la parte actora la que esté retardando el cumplimiento de la determinación arbitral, sino que la dilación resulta atribuible de manera exclusiva al tribunal administrativo encargado de impartir justicia en materia laboral.

28.- Además de la vulneración a los derechos de la quejosa, la conducta omisa del Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guerrero, constituye una inobservancia a lo previsto en el artículo 23 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua, según el cual “...*Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,*

imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales, tendrá entre otras cosas, la obligación de cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado, y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio...”.

29.- Con ello, aunado a la injustificada falta de rendición del informe a este organismo, puede haber incurrido en responsabilidad administrativa, circunstancia que deberá analizarse dentro del procedimiento que para tal finalidad se instaure, cuya incoación deberá solicitarse al Presidente Municipal de Guerrero, en su carácter de Presidente del Ayuntamiento, en base a lo establecido por los artículos 20, 28 fracción III y 29 fracción IX del Código Municipal para nuestro Estado, en relación con los artículos 2 y 3 fracción VI de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

30.- En base a los razonamientos y consideraciones antes detallados, esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos estima que a la luz del sistema de protección no jurisdiccional, se desprenden evidencias suficientes para considerar violados los derechos fundamentales de “A”, específicamente el derecho a la seguridad jurídica, en su modalidad de inejecución de laudo, por lo que en consecuencia, respetuosamente y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 y 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, resulta procedente emitir las siguientes:

IV.- RECOMENDACIONES:

PRIMERA.- A Usted, **C. LIC. EFRAÍN HERNÁNDEZ CABALLERO**, en su calidad de Presidente del Ayuntamiento de Guerrero, someta a consideración de ese órgano colegiado del municipio, a efecto de que se instruya procedimiento administrativo al Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guerrero, en el que se analicen las evidencias y razonamientos esgrimidos en la presente, y en su caso, se impongan las sanciones que en derecho correspondan.

SEGUNDA.- A Usted, **C. LIC. HÉCTOR MANUEL GRANADOS ARANA**, Presidente del Tribunal de Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Municipio de Guerrero, se realicen a la brevedad, las actuaciones necesarias para que se ejecute conforme a derecho proceda, el laudo dictado dentro del procedimiento identificado.

31.- La presente recomendación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 primer párrafo de la Ley que rige nuestra actuación, tiene el carácter de pública y

con tal carácter se divulga en la Gaceta de este organismo. Se emite con el propósito fundamental tanto de hacer una declaración respecto a una conducta irregular cometida por servidores públicos en el ejercicio de las facultades que expresamente les confiere la ley, como de obtener la investigación que proceda por parte de las dependencias administrativas o cualesquiera otras autoridades competentes para que, dentro de sus atribuciones, apliquen las sanciones conducentes y se subsane la irregularidad de que se trate.

32.- Las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos no pretenden, en modo alguno, desacreditar a las Instituciones ni constituyen una afrenta o agravio a las mismas o a sus titulares, sino que, por el contrario, deben ser concebidas como instrumentos indispensables en las sociedades democráticas y en los Estados de Derecho, para lograr su fortalecimiento a través de la legitimidad que con su cumplimiento adquieren autoridades y servidores públicos ante la sociedad.

33.- Dicha legitimidad se robustecerá de manera progresiva cada vez que se logre que aquellas y éstos, sometan su actuación a la norma jurídica y a los criterios de justicia que conlleven el respeto a los derechos humanos.

34.- En todo caso, una vez recibida la recomendación, la autoridad o servidor público de que se trate, informará dentro de los quince días hábiles siguientes a su notificación, si se acepta. Entregará en su caso, en otros quince días adicionales, las pruebas correspondientes de que se ha cumplido, ello según lo establecido en el artículo 44 de la Ley de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

35.- La falta de respuesta dará lugar a que se interprete que la misma no fue aceptada. En caso de que se opte por no aceptar la presente recomendación, le solicito en los términos del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 44 de la multireferida Ley, que funde, motive y haga pública su negativa.

No dudando de su buena disposición para que sea aceptada y cumplida.

A T E N T A M E N T E:

LIC. JOSÉ LUIS ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE

c.c.p.- Quejosa, para su conocimiento.

c.c.p.- Lic. José Alarcón Ornelas, Secretario Ejecutivo de la CED.

c.c.p.- Gaceta que publica este Organismo.